



REPUBLICA DE COLOMBIA
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLIN
SALA QUINTA DE DECISION LABORAL

Proceso:	Ordinario Laboral
Radicación:	05001-31-05-002-2015-01660-01
Demandante:	Saúl de Jesús Posada Ochoa
Demandado:	Colpensiones
Asunto:	Apelación y consulta
Procedencia:	Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Medellín
Magistrada ponente:	Sandra María Rojas Manrique
Temas:	Reliquidación pensión

Medellín, enero veintinueve (29) de dos mil veintiuno (2021)

En la fecha, la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del distrito Judicial de Medellín, integrada por los magistrados VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO, CARLOS JORGE RUÍZ BOTERO y SANDRA MARIA ROJAS MANRIQUE, como magistrada sustanciadora, procede, de conformidad con el artículo 15 del decreto legislativo 806 de 2020, a decidir los recursos de apelación interpuestos por los apoderados de las partes, así como el grado jurisdiccional de Consulta en favor de Colpensiones, en los aspectos no apelados, respecto de la sentencia proferida por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Medellín, el 17 de septiembre del 2020, en el proceso ordinario laboral instaurado por el señor SAÚL DE JESÚS POSADA OCHOA en contra de la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES. Radicado 05001-31-05-002-2015-01660-01.

1.- ANTECEDENTES

1.1.- DEMANDA

El señor SAUL DE JESÚS POSADA OCHOA, instauró demanda ordinaria laboral, en contra de COLPENSIONES, pretendiendo se ordene a ésta, que se pague la pensión de vejez concedida en la Resolución GNR 230540 del 2013 y que se dejó en suspenso, desde la fecha del retiro, esto es, desde el 30 de abril del 2013; se ordene a Colpensiones reliquidar la pensión de vejez, teniendo en cuenta que el tiempo que aparece en la historia laboral, desde abril y hasta el 30 de octubre del 2013, no se debe incluir, por ser una cotización no consentida; se ordene a Colpensiones reconocer la sanción por el no pago oportuno de las mesadas, según el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, desde la fecha del retiro, es decir, desde el 30 de abril del 2013 y hasta el pago; y la indexación de las mesadas.

Los supuestos fácticos que apoyan las pretensiones, se sintetizan en que el accionante cumplió los 60 años el 25 de abril del 2012, solicitando la pensión de vejez, el 12 de abril de la misma anualidad, procediendo la entidad, por Resolución GNR 230540 del 2013, a conceder la prestación, a partir del 1º de septiembre del 2013, en cuantía de \$3.523.831, la cual se dejó en suspenso, hasta tanto el accionante se retirara del servicio, interponiéndose recursos frente a dicho acto administrativo, argumentando que el actor era Concejal del Municipio de Caldas, por lo que no era empleado público y no recibía salario sino honorarios, solicitando, de igual forma, se liquidara nuevamente el IBL, por cuanto la entidad de seguridad social, tuvo en cuenta aportes realizados por el Municipio de Caldas, sin el consentimiento y la afiliación del accionante, ello por cuanto, como Concejal, no tenía la obligación de cotizar, procediendo la entidad, por medio de las Resoluciones GNR 309621 del 2014 y VPB 46369 del 2015, a negar lo pretendido. Agrega que la novedad de retiro se realizó en mayo del 2013, apareciendo cotizaciones posteriores, hasta octubre del 2013,

sin que hubiera afiliación ni aportes, por lo que, cuanto se reconozca la pensión, se deben de conceder los intereses moratorios.

1.2.- CONTESTACIÓN

Por conducto de su representante legal y a través de apoderada, COLPENSIONES dio respuesta al libelo introductorio, indicando que es cierto lo relacionado con la edad del actor, el reconocimiento de la prestación y que la misma se dejó en suspenso, así como que en la historia laboral aparecen cotizaciones hasta octubre del 2013, pero que no es cierto que en dichos periodos no hubiere afiliación o aportes, puesto que, al aparecer en la historia laboral, se presume la afiliación.

A su vez, propuso las excepciones de inexistencia de la obligación prestacional; cobro de lo no debido; buena fe de Colpensiones; imposibilidad de condena en costas; prescripción; improcedencia de intereses moratorios; compensación; la innominada o genérica.

1.3.- SENTENCIA DE PRIMER GRADO

Mediante sentencia proferida el 17 de septiembre del 2020, el Juzgado de conocimiento declaró que al demandante le asiste derecho a que se le reliquide la pensión de vejez, con base en el Decreto 758 de 1990, aplicando una tasa de reemplazo del 90%; condenó a la demandada a pagar al actor \$75.822.130, por reajuste del retroactivo pensional, causado por reliquidación de la pensión, entre el 1º de noviembre del 2013 y el 31 de septiembre del 2020, autorizando realizar los descuentos en salud y ordenando que a partir del 1º de octubre del 2020, Colpensiones continúe reconociendo una mesada pensional de \$5.766.160; condenó a la demandada a reconocer al demandante, la suma de \$33.407.894, por concepto de intereses moratorios causados entre el 4 de enero del 2015 y el 1º de abril del 2016, cuando fue ingresado en nómina, la cual deberá de indexarse al momento de su pago, absolviendo a la entidad de

la obligación de reconocer intereses moratorios, sobre la reliquidación; declaró probada parcialmente la excepción de improcedencia de los intereses moratorios y no probada la de prescripción; condenó en costas a la demandada.

1.4.- RECURSO DE APELACIÓN

Demandante

El apoderado del demandante, interpone el recurso de apelación, indicando que discrepa de la fecha en la que se toman los intereses moratorios, por cuanto considera que la Resolución GNR 309621, es clara en cuanto a la fecha de la reclamación, ya que se indicó que el accionante solicitó la pensión el 13 de marzo del 2014, por lo que a partir de esta fecha, se deberían contar los cuatro meses para conceder intereses, es decir, los mismos se deben de reconocer desde el 14 de julio del 2014 hasta el 1º de abril del 2016.

Colpensiones

La apoderada de la accionada interpone recurso de apelación frente a la providencia, solo en cuanto a los intereses moratorios, por considerar que los mismos no resultan procedentes, por cuanto la entidad no ha incurrido en mora alguna frente a su pago, ya que como lo expresa la Ley, la mora inicia cuando se ha adquirido el derecho pensional y no se pagan las mesadas en el tiempo oportuno, es decir, una vez el derecho ha ingresado al patrimonio del pensionado, o cuando pasa de ser una mera expectativa a un derecho adquirido.

Continúa indicando que el demandante solicitó un nuevo estudio de la prestación, solicitando el inicio del pago de su mesada pensional, la cual fue reconocida mediante Resolución GNR 230540 del 2013, pensión que no se pagó por estar condicionada a su retiro, informando a Colpensiones que el

periodo para el cual fue elegido, terminaba el 31 de diciembre del 2015, solicitando se le pague la mesada a partir de 1° de enero del 2016.

Agrega que la Corte ha sentado su posición frente al tema de los intereses moratorios, citando una Sentencia del 2013, MP Jorge Mauricio Burgos Ruíz, de la cual no cita su radicación, solicitando se revoque la sentencia frente a los intereses moratorios.

1.5.- ALEGATOS DE SEGUNDA INSTANCIA

Dentro de la oportunidad procesal para alegar de conclusión se pronunció la apoderada de Colpensiones indicando que las cotizaciones efectuadas por el actor, incluyen tiempos públicos no cotizados a su representada, explicando que, analizados los actos administrativos obrantes en el plenario, se tiene como su representada dio cumplimiento a lo plasmado en los mismos, por lo que no hay lugar a acceder a las pretensiones de la demanda.

2. CONSIDERACIONES

2.1.- COMPETENCIA DE LA SALA

Inicialmente, debe advertirse que la competencia de esta Corporación está dada por los puntos que son objeto de apelación, entendiendo que las partes quedaron conformes con los demás aspectos decididos; de conformidad con el art 57 de la Ley 2ª de 1984; los artículos 10 y 35 de la Ley 712 de 2001, que modificaron los artículos 15 y 66A del C.P.L y de la S.S., respectivamente.

De igual forma procede la consulta, en cumplimiento del mandato contenido en el artículo 69 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social que dispone “*También serán consultadas las sentencias de primera instancia cuando fueren*

totalmente adversas a la Nación, al Departamento o al Municipio o a aquellas entidades descentralizadas en las que la Nación sea garante”.

2.2.- HECHOS ESTABLECIDOS EN EL TRÁMITE DE LA INSTANCIA

Quedaron acreditados en el trámite del proceso y no son objeto de controversia los siguientes hechos:

- Que el actor nació el 25 de abril de 1952 –ver folio 41-.
- Que por Resolución GNR 230540 del 2013, Colpensiones indicó que el actor cuenta con 1893 semanas cotizadas en toda su vida laboral, que acredita 15 años o más de servicios o cotizaciones, a la entrada en vigencia del Sistema General de Pensiones, cumpliendo de igual forma, con el requisito de rentabilidad, por lo que recupera el régimen de transición, liquidando el IBL en \$4.600.302, con una tasa de reemplazo del 76.60%, obteniéndose una mesada de \$3.523.831, precisando que el disfrute sería a partir del 1º de septiembre del 2013, esto es, con corte a nómina, con la obligación de demostrar el retiro efectivo del servicio, so pena de suspender la nómina –ver folios 7 a 11-.
- Que por Resolución GNR 309621 del 2014 y VPB 46369 del 2015, Colpensiones insiste en el hecho de que es necesario que el actor se retire del servicio, dada su calidad de servidor público, para poder levantar la suspensión del pago de la pensión –ver folios 16 a 18 y 20 a 23-.

2.3.- PROBLEMAS JURIDICOS A RESOLVER

Debe determinar la Sala:

¿Si es procedente ordenar la reliquidación de la pensión de vejez del actor, sumando los tiempos públicos no cotizados?

¿Es procedente el reconocimiento de los intereses moratorios y en caso afirmativo si se debe modificar la Sentencia, en el sentido de ordenar a Colpensiones, que reconozca los intereses moratorios, por concepto del retroactivo pensional reconocido en el transcurso del proceso, desde el 14 de julio del 2014 y no desde el 4 de enero de 2015?

2.4.- TESIS DE LA SALA

Problemas jurídicos que se resuelven bajo la tesis según la cual, es procedente reliquidar la pensión de vejez del actor, aplicando la sumatoria de tiempos públicos y privados, con una tasa de reemplazo del 90%, atendiendo a que el demandante es beneficiario del régimen de transición pensional y le es aplicable el decreto 758 de 1990, encontrando, de igual forma, procedente la condena a los intereses moratorios, modificando la fecha a partir de la cual se habrán de reconocer los mismos y la cuantía, en consecuencia, la Sentencia debe ser MODIFICADA PARCIALMENTE en su numeral tercero y CONFIRMADA en lo demás, como se explica.

2.5.- PREMISAS NORMATIVAS

De la reliquidación de la pensión de vejez, aplicando la sumatoria de tiempos

De manera inicial y previo a adentrarnos en el estudio del tema, se tiene como después de radicada la demanda, Colpensiones expidió la Resolución GNR 88556 del 29 de marzo del 2016, accediendo parcialmente a las pretensiones invocadas en este proceso, ordenando la reliquidación de la pensión y la

inclusión en nómina de la pensión de vejez del demandante, reconociendo que el mismo es beneficiario del régimen de transición, estableciendo como mesada pensional, para el 1° de noviembre del 2013, la suma de \$3.612.585, liquidando mesadas por valor de \$109.454.349, mesadas adicionales por \$11.112.709, descuentos por salud \$13.134.500, para un valor a pagar de \$107.432.558, dineros que fueron ingresados en la nómina de abril del 2016, que se paga en mayo de la misma anualidad, liquidación que realizó con base en lo establecido en el Decreto 758 de 1990, sobre un IBL de \$4.816.780, al cual le aplicó una tasa de reemplazo del 75%.

Estando claro lo anterior, tenemos como, el demandante conserva el régimen de transición, como fue establecido por la entidad, en el acto administrativo previamente referenciado y se desprende de las pruebas allegadas al plenario, ello por cuanto el mismo nació el 25 de abril de 1952, indicándose en la resolución GNR 88556 del 2016, que el demandante presentó un traslado al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, pero regresó al Instituto de Seguros Sociales, el 10 de diciembre del 2003, habiendo recuperado el régimen de transición; precisando que, contrario a lo afirmado en el referido acto administrativo, tal prerrogativa se conserva, no porque el promotor del proceso haya retornado al Régimen de Prima Media, dentro del año siguiente a la vigencia de la ley 797 de 2003, como lo indica Colpensiones, sino por tener más de 15 años de servicios al 01 de abril de 1994, toda vez que registra 924.57 semanas, incluido el tiempo público no cotizado.

La Corte Constitucional, a través de la sentencia SU-769 de 2014, con ponencia del Magistrado Jorge Iván Palacio Palacio, compendia la línea jurisprudencial según la cual, es posible acumular cotizaciones efectuadas tanto en los sectores público y privado, a efectos de reconocer, en virtud del régimen de transición, una pensión de vejez en aplicación del Acuerdo 049 de 1990.

Debe recordarse que la unificación que realiza la Sala Plena, en la sentencia analizada, no se da respecto de la procedencia de la sumatoria, criterio uniforme y pacífico en el Tribunal Constitucional, sino respecto de la posibilidad de la misma con relación al requisito de las 500 semanas dentro de los 20 años anteriores al cumplimiento de la edad mínima pensional.

En la sentencia se expone:

“Como ya se mencionó, reiterada Jurisprudencia de la Corte Constitucional, ha sostenido que las personas cotizan y por consiguiente, cumplen los requisitos ante el Sistema General de Seguridad Social en Pensiones y no ante las entidades específicas que lo componen.

Justamente en aplicación de esta tesis, la jurisprudencia de esta Corporación ha sostenido expresamente que (i) ‘el artículo 12 del Decreto 758 de 1990 en ninguno de sus apartes exige que las cotizaciones se efectúen de manera exclusiva al fondo del Instituto de Seguros Sociales’ por lo que se incurre en un error al interpretar esta norma de manera distinta a lo que realmente se encuentra establecido en ella y (ii) en virtud del principio hermenéutico de interpretación más favorable a los intereses del trabajador, es posible computar las semanas que cotizó una persona en el sector público antes de entrar en vigencia la ley 100 de 1993 con las que cotizó como empleado del sector privado en cualquier tiempo ”.

... “En jurisprudencia más reciente la Corte se pronunció sobre el caso de una señora de 77 años que laboró 405 semanas como servidor público y cotizó 596 semanas al Instituto de Seguros Sociales, para un total de 1001, a quien le fue negada la pensión de vejez por no ser posible, según esa entidad, acumular tiempos de servicio bajo el régimen contenido en el Acuerdo 049 de 1990. Así, mediante la sentencia T-100 de 2012, consideró:

“[L]a jurisprudencia de esta Corporación ha sido enfática al resaltar que esta interpretación de la normativa es errónea y atenta contra los derechos fundamentales de los beneficiarios del régimen de transición.

Esto por cuanto: (i) al exigir que para acceder a la pensión de vejez de acuerdo con el Decreto 758 de 1990 las cotizaciones se hayan realizado de manera exclusiva al Seguro Social, se está requiriendo el cumplimiento de un elemento que la norma no consagra; (ii) los requisitos para acceder a los beneficios Sistema General de Seguridad Social se acreditan es ante el sistema mismo y no ante las entidades que lo conforman; y (iii) el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 limitó el régimen de transición a solo tres ítems (edad, tiempo y monto) y estableció que ‘[L]as demás condiciones y requisitos aplicables a estas personas para acceder a la pensión de vejez, se regirán por las disposiciones contenidas en la presente Ley’, por lo que haciendo una lectura integral de la Ley 100 de 1993 -especialmente del literal f) del artículo 13, el parágrafo 1º del artículo 33 y el parágrafo del artículo 36 de la misma-, los tiempos deben acumularse para efectos de la contabilización del número de semanas de cotización requeridas”.

Es de anotar que la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, atendiendo a su nueva integración, en providencias CSJ SL1947-2020 y CSJ SL1981-2020, proferidas el 01 de julio de 2020, cambió el criterio que venía sosteniendo en forma reiterada y uniforme, relativo a la improcedencia de la sumatoria de tiempo público no cotizado bajo el decreto 758 de 1990, para propugnar la sumatoria de tiempos públicos y privados, en aplicación del régimen de transición.

A su vez en sentencia SL 2557 (72425) del 08 de julio de 2020, magistrado ponente doctor Iván Mauricio Lenis Gómez, la Sala Laboral de la citada corporación, admite la procedencia de la referida sumatoria para efectos de la reliquidación pensional en los siguientes términos:

...“Pues bien, en recientes pronunciamientos la Corte cambió de criterio jurisprudencial y estableció que en el marco del Acuerdo 049 de 1990 es procedente la sumatoria de tiempos de servicios en los sectores público y privado, con o sin cotización al Instituto de Seguros Sociales (CSJ SL1947-2020 y CSJ SL1981-2020). Precisamente, en la primera referida, la Corporación explicó:

No obstante, ante un nuevo estudio del asunto, la Corte considera pertinente modificar el anterior precedente jurisprudencial, para establecer que las pensiones de vejez contempladas en el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de la misma anualidad, aplicable por vía del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, pueden consolidarse con semanas efectivamente cotizadas al ISS, hoy Colpensiones, y los tiempos laborados a entidades públicas.

Para modificar tal criterio jurisprudencial, debe destacarse que tal como lo ha indicado la jurisprudencia de esta Corporación, el régimen de transición de la Ley 100 de 1993 tuvo como finalidad esencial proteger las expectativas legítimas de quienes estaban próximos a pensionarse, a fin que estuvieran cobijados por la legislación precedente, en los aspectos definidos por el legislador.

Este tipo de regímenes se prevé en los sistemas de seguridad social a fin de que los cambios legislativos en materia pensional no sean abruptos para los ciudadanos, sino que su aplicación sea progresiva y gradual y no se afecten las expectativas legítimas de quienes se encontraban cerca de consolidar los derechos prestacionales. Es el establecimiento de condiciones de transición lo que garantiza la aplicación ultractiva de la disposición anterior, se reitera, en algunos aspectos definidos por el propio legislador.

Específicamente, el régimen de transición contemplado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 implicó una protección especial para quienes se encuentran cobijados por éste,

en el sentido de que la normativa anterior aplicable tendría los mencionados efectos ultraactivos solamente en los aspectos de edad, tiempo y monto, pues el resto de condiciones pensionales se encuentran regidas por las disposiciones de la Ley 100 de 1993.

De lo anterior se deriva que si la disposición precedente solo opera para las pensiones de transición en los puntos de edad, tiempo y monto, entonces la forma de computar las semanas para estas prestaciones se rige por el literal f) del artículo 13, el parágrafo 1.º del artículo 33 y el parágrafo del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, que disponen expresamente la posibilidad de sumar tiempos privados y tiempos públicos, así éstos no hayan sido objeto de aportes a cajas, fondos o entidades de previsión social.

En efecto, el literal f) del artículo 13 y el parágrafo del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 establecen que para el reconocimiento de las pensiones se tendrá en cuenta la suma de las semanas cotizadas al Instituto de Seguros Sociales o a cualquier caja, fondo o entidad del sector público o privado, o el tiempo de servicio que se haya prestado en calidad de servidor público, cualquiera que sea el número de semanas o el tiempo de servicio. En el mismo sentido, se reafirma, el parágrafo 1.º del artículo 33 de dicho precepto consagra la validez de los tiempos como servidor público para el cómputo de las semanas.

(...)

La posibilidad de la sumatoria de tiempos parte también de la propia Ley 100 de 1993, que contempló diversos instrumentos de financiación, tales como los bonos pensionales, los cálculos actuariales o las cuotas partes, que permiten contabilizar todos los tiempos servidos y cotizados para efectos del reconocimiento de las prestaciones económicas, sin distinción alguna.

En virtud de ello, las pensiones del régimen de transición previstas en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 no pueden ser ajenas al anterior entendimiento, puesto que éstas pertenecen evidentemente al sistema de seguridad social integral y, como tal, pese a tener aplicación ultractiva de leyes anteriores en algunos aspectos como tiempo, edad y monto, en lo demás siguen gobernadas por dicha ley, que, finalmente, es la fuente que les permite su surgimiento a la vida jurídica y a la que se debe remitir el juez para su interpretación.

En tal dirección, así debe entenderse el parágrafo del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, que permite la sumatoria de tiempos públicos y privados, por cuanto es inusual que un parágrafo no haga relación a la temática abordada por una norma, como en este caso serían las pensiones derivadas del régimen de transición, de modo tal que el cómputo previsto en este parágrafo es predicable tanto para las prestaciones de Ley 100 de 1993 como las originadas por el beneficio de la transición de esta normatividad(...).

Conforme lo anterior, conforme al Acuerdo 049 de 1990 es viable acumular los tiempos de servicios públicos que cotizó la actora a otras cajas de previsión del sector público a efectos del reconocimiento de la pensión de vejez contemplada en dicho reglamento.

De modo que tal criterio jurisprudencial también es aplicable al asunto en controversia, esto es, a la reliquidación de la pensión de vejez de la demandante...”

Así las cosas, encuentra esta Sala de Decisión que, en acatamiento a la reciente jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, se hace necesario cambiar la posición que se venía aplicando para, en su lugar, acoger la tesis de la reliquidación de las pensiones de vejez, reconocidas bajo el amparo del régimen de transición, aplicando para ello, la sumatoria de tiempos.

Ahora, en vista de que el demandante cuenta con 1912 semanas laboradas en toda su vida laboral, sumando los tiempos públicos y privados, tal y como lo reconoció la accionada en la Resolución GNR 88556 del 29 de marzo del 2016, es claro que la tasa de reemplazo a aplicar, debe de ser del 90%, sobre el IBL liquidado y tenido en cuenta por la entidad, en dicho acto administrativo, el mismo que, para el año 2013, ascendió a la suma de \$4.816.780, lo cual arrojará una mesada de \$4.335.102

Revisada la reliquidación realizada por el Despacho, se tiene como la misma se encuentra ajustada a derecho, por lo que se habrá de confirmar la providencia en este punto.

Intereses moratorios

Respecto de los intereses moratorios, la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, a partir de la sentencia SL 703 de 2013, con ponencia del doctor Jorge Mauricio Burgos Ruiz, flexibilizó el criterio según el cual, su aplicación era objetiva:

“La Sala como consecuencia de su nueva integración ha considerado pertinente moderar esta posición jurisprudencial, para aquellos eventos en que las actuaciones de las administradoras de pensiones públicas o privadas, al no reconocer o pagar las prestaciones periódicas a su cargo, encuentren plena justificación bien porque tengan respaldo normativo, ora porque su postura provenga de la aplicación minuciosa de la

ley, sin los alcances o efectos que en un momento dado puedan darle los jueces en la función que les es propia de interpretar las normas sociales y ajustarlas a los postulados y objetivos fundamentales de la seguridad social, y que a las entidades que la gestionan no les compete y les es imposible predecir”.

Frente a este aspecto y contrario a lo indicado por la apoderada de Colpensiones en su recurso de apelación, encuentra la Sala procedente la condena impuesta a la entidad por este concepto, por ser evidente la mora en la que se incurrió en el reconocimiento de la prestación, teniendo en cuenta, tal y como lo expuso el apoderado del actor en la sustentación de su recurso, que la segunda solicitud de reconocimiento de la pensión, se presentó el 13 de marzo del 2014, tal y como se dejó plasmado en la Resolución GNR 309621 del 2014, contando la entidad para dar respuesta a la misma, hasta el 13 de julio del 2014, incurriéndose en mora en el pago de las mesadas retroactivas que se adeudan, desde el 14 de julio del 2014 y hasta el 31 de marzo del 2016, ello porque de conformidad con lo plasmado en la Resolución GNR 88556 del 29 de marzo del 2016, que reconoce parcialmente las pretensiones en sede administrativa, se ingresó la prestación en la nómina de abril que se paga en mayo del 2016, haciéndose hincapié en el hecho de que no existió ninguna circunstancia, que pudiera entenderse justificativa de la negativa a reconocer la prestación, por parte de la entidad de seguridad social convocada a juicio.

Así las cosas, revisada la liquidación de los intereses moratorios desde el 14 de julio del 2014 y hasta el 31 de marzo del 2016, los mismos ascienden a la suma de TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CINCUENTA Y SEIS (\$33.352.056), suma ésta, que es levemente inferior a la reconocida por el a quo, diferencia que se explica en el hecho de que el señor Juez, al momento de liquidar los intereses, si bien toma los mismos desde una fecha muy posterior a la que se toma en esta oportunidad, esto es, 4 de enero del 2015, lo cierto del caso es que el mismo toma como fecha final abril del 2016, mientras que acá se toma el 31 de marzo de dicha anualidad, lo que genera una tasa de interés

diferente, aunado al hecho de que el Juzgado trabaja con el valor de las mesadas reliquidadas, aplicando una tasa del 90%, lo cual no es procedente, por cuanto lo que se está reconociendo es los intereses sobre el retroactivo reconocido por la accionada, siendo claro como no proceden los intereses respecto de la reliquidación de la pensión, es más, así fue declarado por la señora Juez, pero al parecer, debido a un error involuntario, toma un valor de mesadas diferentes.

Por lo anterior, se habrá de modificar la decisión en este punto. Sin costas en esta instancia.

3. DECISION

En consonancia con lo expuesto, la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley:

FALLA

1.- Se **MODIFICA el numeral tercero** de la Sentencia de Primera Instancia proferida por el Juzgado Segundo Laboral de Circuito de Medellín, el 17 de septiembre de 2020, en el proceso ordinario instaurado por el señor SAÚL DE JESÚS POSADA OCHOA en contra de la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES, para en su lugar indicar que los intereses moratorios por concepto de retroactivo de la pensión de vejez ya reconocido al actor, se causan desde el 14 de julio del 2014 y hasta el 31 de marzo del 2016, los cuales ascienden a la suma de TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CINCUENTA Y SEIS (\$33.352.056).

2.- Se **CONFIRMA** la sentencia en lo demás.



3.- Sin **COSTAS** en esta instancia.

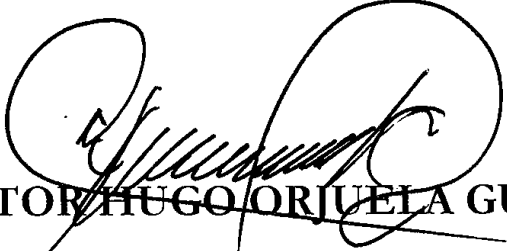
4.- Se ordena la devolución del expediente al Juzgado de origen

El fallo anterior queda notificados a las partes por Estados, de conformidad con el Artículo 295 del Código General del Proceso.

Los Magistrados,


SANDRA MARIA ROJAS MANRIQUE


CARLOS JORGE RUIZ BOTERO


VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO

La presente sentencia fue notificada por estado No.**015** fijado en la secretaría de la sala del Tribunal Superior de Medellín, a las ocho de la mañana (8:00 a.m.) del 1 de febrero de 2021.

RUBEN DARIO LOPEZ BURGOS

Secretario